



ACTUALIDAD

4

LOS DESAFIOS A LAS NUEVAS DEMOCRACIAS DEL ESTE

El caso húngaro

Carmen GONZALEZ ENRIQUEZ

El derrumbe de los regímenes autoritarios del «socialismo real» de la Europa del Este y su sustitución por democracias parlamentarias pluripartidistas ha constituido, está constituyendo, un tipo totalmente nuevo de transición política desde la dictadura a la democracia.

Obviamente cada transición histórica es un caso diferente, puesto que cada país lo es, pero en el caso del bloque del Este existen notables peculiaridades comunes que a su vez lo alejan de las experiencias de otras transiciones, como la española, o las más recientes en América Latina.

Entre estas numerosas peculiaridades, hay una que, por decirlo así, resume o está en el

centro de la red de fenómenos sociales y políticos que están haciendo tan difícil la transición a la democracia en estos países, y es la inexistencia de una sociedad civil autónoma frente al Estado. Por sociedad civil no me refiero aquí sólo al conjunto de las organizaciones que pueden constituir la expresión de las diferencias de intereses o ideologías de la población, sino a las instituciones sociales y económicas que crean la posibilidad de una

Ningún régimen político consiguió destruir de forma tan eficaz y completa cualquier vestigio de independencia y autonomía personal o grupal.

independencia personal, material, frente al poder estatal.

La liquidación de esta sociedad civil fue la tarea de los primeros años de «construcción del socialismo» en los países europeos que quedaron bajo la órbita soviética tras la II Guerra Mundial. Nunca, ningún régimen político moderno, ni siquiera la Alemania hitleriana, consiguió destruir de forma tan eficaz y completa cualquier vestigio de independencia y autonomía personal o grupal.

Y la clave para obtener este control sobre la sociedad no era la represión política, aunque sin duda ésta era un elemento muy importante, sino la estatalización de toda actividad económica. El principal medio de disciplina política en manos del Partido único era su control sobre todos y cada uno de los puestos de trabajo existentes en el país. Si a esto se añade el hecho de que en aquel socialismo era legal y virtualmente imposible sobrevivir sin un puesto de trabajo, se explica por qué estos regímenes consiguieron vivir tanto tiempo sin ninguna forma de oposición interna, exceptuando las explosiones espontáneas de ira popular o la «disidencia» de algunos intelectuales.

Pero no se trata aquí de recordar las aberraciones que estos regímenes han cometido en nombre de la clase obrera y en aplicación de un pensamiento marxista totalitario. Se trata de explicar hasta qué punto *su labor sistemática de destrucción de las redes sociales y de las áreas de independencia económica está siendo ahora, y lo será por mucho*

tiempo, un obstáculo y una amenaza a la consolidación de un sistema de democracia parlamentaria.

La sociedad clientelística, nepotista y corporativa que crearon cuarenta años de «socialismo de Estado», con su correlato de atomización e individualismo social, se mantiene íntegramente en pie. *Los Estados ya no pertenecen a los partidos comunistas pero la vida económica sigue perteneciendo a los Estados, y mientras esto no cambie sustancialmente, la democracia seguirá siendo un ejercicio difícil.*

La destrucción que se llevó a cabo a finales de la década de los cuarenta y durante los años cincuenta, dirigida a liquidar cualquier resquicio de autonomía personal y social, sigue vigente, y los países del Este tardarán muchos años en reconstruir ese tejido social que fue tan sistemáticamente aplastado.

Conviene recordar algunos de los pasos de esa destrucción: la colectivización de la agricultura, la estatalización del comercio, la industria y los servicios, la centralización de los sindicatos, la liquidación de los colectivos profesionales, la migración y aculturación forzadas, el control de todas las instituciones financieras, el adoctrinamiento ideológico masivo, la supresión de las organizaciones populares independientes y la estabilización de los medios de comunicación y la vida cultural. A esto hay que añadir la represión en el terreno más propiamente político o estatal, como la liquidación de todos los partidos, la reducción del Parlamento a funciones protocolarias, la supresión de la independencia judicial y de las autonomías locales, etc.

Una norma básica de la democracia es que los conflictos de intereses puedan expresarse abiertamente. Sin embargo, para que esto ocurra no basta con que el derecho de huelga o de manifestación estén reconocidos y amparados. Es necesario también que los agentes sociales gocen de una cierta indepen-

dencia económica frente al Estado, porque si este requisito no se produce el conflicto difícilmente se planteará abiertamente.

Socialdemócratas, liberales y democristianos han llegado hace tiempo a una conclusión común, la de que no habrá democracia estable sin economía de mercado y que una de las más importantes tareas pendientes es la formación de una clase empresarial autónoma. Y no se refieren a gestores competentes, sino a propietarios privados, a «burgueses». Simplemente, la democracia es imposible en una economía estatizada.

Otra característica común a todas las transiciones actuales en la Europa del Este, y que las diferencia muy sustancialmente de otras transiciones del autoritarismo a la democracia, ha sido *el escaso papel jugado por la oposición exterior al régimen*. Exceptuando el caso polaco, en el que la presión de Solidaridad ha sido un elemento clave para producir el cambio de régimen, en todos los demás países la oposición política ha sido inexistente o de una eficacia tan pequeña que de ninguna forma puede considerarse causa del cambio político. De hecho, en la mayoría de estos países, los elementos de oposición organizada a los partidos comunistas han aparecido apenas unas semanas o pocos meses antes del derrumbe definitivo, y en algunos casos, como el búlgaro o el rumano, han aparecido después.

Cualquiera que recuerde la oposición al franquismo y sus manifestaciones en la calle en los años 70, puede comprender fácilmente que un régimen autoritario no se derriba porque se produzcan dos semanas seguidas de manifestaciones populares, como ocurrió en Praga o en Leipzig, y menos aún si se trata de sistemas de Partido-Estado y economía centralizada, en que el gobierno cuenta con muchos más recursos para contener la oposición.

Resulta «idealista» (como diría un marxista) y muy romántico suponer un papel de-

cisivo en estas transiciones a las demandas democratizadoras de las poblaciones de los países del Este. Cuando estas voluntades se expresaron en la calle o de forma organizada en mesas de negociación, el factor político esencial era la disolución de los lazos internos que mantenían unidos a los miembros del grupo dirigente. Y, por supuesto, la desaparición de la amenaza soviética.

La transición a la democracia en estos países no se ha producido como resultado de las presiones democratizadoras de la población en general o de segmentos especiales de la sociedad (exceptuando de nuevo a los obreros de la gran industria en Polonia), sino como fruto del derrumbe del sistema autoritario. Y este derrumbe tiene a su vez su origen en la crisis económica que ha agotado los mecanismos de reproducción de la alianza entre la burocracia estatal, la del Partido, y la de los dirigentes empresariales.

Esto no quiere decir que deba dudarse de la autenticidad del espíritu democrático de las poblaciones de estas nuevas democracias (al menos no más que del de cualquier nueva democracia), pero sí que el peligro de involuciones autoritarias es fuerte si continúa agravándose la crisis económica.

Todavía es pronto para evaluar en su justa medida qué consecuencias tendrá sobre las nuevas democracias esta peculiarísima forma de nacimiento. Pero ahora aparecen ya algunas evidentes, todas ellas obstáculos a la consolidación democrática. (En todo lo que sigue queda excluida la ex RDA cuyo

La sociedad ientelística, nepotista y corporativa que crearon cuarenta años de «socialismo de Estado» se mantiene íntegramente en pie.

proceso político es del todo diferente por razones evidentes).

La debilidad del sistema de partidos.

Podría decirse que ésta es una característica común a cualquier democracia joven y que por tanto no constituye una peculiaridad de estos países. Sin embargo hay una diferencia de grado muy importante entre el nivel de consolidación de los partidos políticos con el que comenzaron las democracias española, griega, portuguesa, chilena o argentina, por poner algunos ejemplos, y el que tienen aún ahora, a un año del cambio, los países del Este. Obviamente no me refiero aquí a la ex RDA, en la que los partidos de la Alemania occidental han ocupado el nuevo espacio político.

Los partidos políticos de las nuevas democracias del Este pueden dividirse en dos grandes grupos: los que se han formado *ex-novo* en los últimos años y los que ya existían en los años cuarenta pero fueron suprimidos o limitados al papel de comparsas durante la dictadura y que ahora renacen a la actividad. En ambos casos, los nuevos grupos políticos se han organizado o reorganizado con precipitación para ocupar el vacío de poder producido por el derrumbe del viejo sistema.

Todos ellos (excepto, claro está, los herederos de los partidos comunistas) se definen por su posición antagónica al pasado socialista y por su carencia de propuestas positivas y de programas. Esta es una de las consecuencias de la creencia de oposición política en el pasado a los regímenes comunistas y de

Otra característica común a todas las transiciones actuales en la Europa del Este es el escaso papel jugado por la oposición exterior al régimen.

la velocidad con que se han producido los cambios. Los «disidentes» del socialismo real se imaginaban en este mismo papel por muchos años y nunca se ocuparon de elaborar una política para el postcomunismo. El derrumbe del régimen «les cayó» encima dejándoles casi tan asombrados como a los observadores occidentales.

En la actualidad, tanto los partidos nuevos como los viejos renacidos se encuentran sumidos en profundas divisiones internas en todos los países. En los grupos nuevos, como Solidaridad, el Foro Cívico checo y su equivalente eslovaco, o la Alianza de Demócratas Libres y el Foro de Demócratas húngaros, conviven tendencias muy diferentes que van desde el populismo nacionalista hasta la socialdemocracia, pasando por la democracia cristiana y el liberalismo.

En los viejos grupos renacidos, como los antiguos partidos campesinos, cristianos o socialdemócratas, las luchas internas fraticidas y escandalosas son la moneda común. Estos grupos suelen tener una militancia ya envejecida y dan continuas muestras de no entender la nueva sociedad en que actúan ahora.

El caso de los viejos partidos socialdemócratas que ahora reaparecen resulta especialmente revelador sobre la complejidad de la situación política actual. La mayoría de los viejos partidos socialdemócratas fueron obligados a fusionarse con los partidos comunistas a finales de los años cuarenta. En otros casos simplemente se les obligó a disolverse igual que a los partidos «burgueses». De una u otra forma el resultado fue que desaparecieron de la vida política como tales partidos y que no volvieron a actuar, ni siquiera clandestinamente, hasta 1988-1990. (Otra cosa es que el pensamiento socialdemócrata estuviera presente en sectores reformistas de los partidos comunistas y de la oposición intelectual, como lo está aún, y que desde allí haya tenido un papel crucial en alguna de las transiciones).

Cuando los partidos socialdemócratas han reaparecido, recogiendo a los supervivientes de entre sus antiguos militantes, lo han hecho cargados de una justa ira contra los responsables de su existencia anulada durante décadas. Sin embargo, no han sido capaces de comprender en su justa medida hasta qué punto «el enemigo comunista» se había esfumado y han entrado en la vida política clamando contra un fantasma. El anticomunismo ha aparecido como una de las principales señas de identidad política de la Europa del Este.

Sienten tanto temor a ser confundidos con los sectores reformistas de los antiguos partidos comunistas (que en muchos casos se autoconsideran sinceramente socialdemócratas), que sus ataques se dirigen de modo irracional, sectario y virulento principalmente contra ellos, en lugar de enfrentarse a la nueva derecha, o de concentrar sus esfuerzos en confeccionar programas atractivos y realistas.

El escasísimo éxito electoral de los viejos partidos socialdemócratas en las elecciones que se han celebrado hasta ahora en la Europa del Este (excluyendo siempre a la ex RDA) debe entenderse como fruto de esta crisis de identidad y de imagen. Han querido demostrar que eran más anticomunistas que nadie y para ello han utilizado desde el discurso ultraliberal en lo económico hasta un sindicalismo anacrónico, creando una imagen sumamente confusa.

Sin embargo, la socialdemocracia es fuerte como tendencia dentro de grupos políticos con mucho mayor éxito electoral, como el Foro Cívico checoslovaco, la Alianza de Demócratas Libres húngara o la Solidaridad polaca, y en los nuevos partidos socialistas que recogen a los sectores liberales y reformistas de los antiguos comunistas.

Dada la inestabilidad de los sistemas de partidos actuales, y la necesidad sentida por muchos de contar con un partido socialdemócrata, es muy posible que estos sectores ahora

La transición a la democracia en estos países se ha producido como fruto del derrumbe del sistema autoritario.

dispersos lleguen a agruparse. Lo que resulta mucho más dudoso es que puedan hacerlo bajo el ala de los viejos partidos nominalmente socialdemócratas.

Una causa importante de la debilidad del sistema de partidos es *la falta de estructuras de representación de los intereses sectoriales*, que fueron destruidas o anuladas por la fiebre totalitaria del viejo régimen. El papel que cumplen en los países occidentales los sindicatos, las organizaciones empresariales, las asociaciones de vecinos, de consumidores, de profesionales y muchas otras, es recogido en Europa del Este directamente por los partidos políticos, a falta de estas organizaciones intermedias.

De esta forma los partidos están sometidos a una multiplicidad de presiones de intereses particulares, que en una democracia parlamentaria consolidada se expresarían en otras vías, y que en estos países amenazan continuamente la capacidad de dedicación de los partidos a elaborar políticas nacionales.

El recurso a la política simbólica: religión, nacionalismo, antisemitismo y xenofobia.

Grupos políticos nuevos o renacidos, organizados apresuradamente y que apenas iniciados a la vida política deben hacerse cargo de sus países en medio de una grave crisis económica y ante una población que, exceptuando de nuevo Polonia, ha participado muy escasamente en la transición y observa con escepticismo el proceso... ¿Es de extrañar que en estas difíciles circunstancias los partidos

Los partidos se definen por su posición antagónica al pasado socialista y por su carencia de propuestas positivas.

en busca de una identidad la construyan precisamente sobre lo más primitivo, visceral y manipulable de sus pueblos?

El renacimiento del nacionalismo en la Europa del Este tiene dos tipos de causas muy diferentes; uno es la existencia de problemas reales de importancia relacionados con cuestiones fronterizas y de minorías nacionales, problemas que fueron silenciados cuidadosamente bajo el ritual del «internacionalismo proletario» y «la solidaridad entre los pueblos» y que sólo ahora tienen la posibilidad de expresarse; el otro es la lógica política y electoral de estos débiles sistemas de partidos inmersos en una crisis económica para la que no conocen remedios.

Ninguno de los países de la Europa poscomunista tiene hoy las mismas fronteras que hace setenta años, y varios de ellos son países nuevos, como Checoslovaquia o Yugoslavia, surgidos por acuerdo de las potencias vencedoras en la I Guerra Mundial, tras la disolución del Imperio austrohúngaro. La región, en conjunto, ha estado históricamente aprisionada entre las fuerzas de tres grandes potencias que a menudo se han repartido sus territorios y han librado batallas sobre su suelo: el Imperio turco otomano al Sur, el germánico al Oeste y el ruso al Este.

Como resultado de estas continuas modificaciones de las fronteras nacionales y de los procesos de colonización de los territorios, en la actualidad muchos países tienen importantes minorías nacionales que se autoidentifican con otros Estados —y que son potencialmente un

canal para la expresión de reivindicaciones territoriales—, y en todos los países existen elementos «irredentistas» que no aceptan las actuales demarcaciones fronterizas.

Las más importantes minorías nacionales sin derecho a formar Estados federados propios son las siguientes:

- En Polonia, ucranianos al Este y alemanes en Silesia;
- en Checoslovaquia, alemanes, polacos, y húngaros (medio millón) en Eslovaquia;
- en Hungría, alemanes, eslovacos, eslovenos y rumanos;
- en Rumania, húngaros (dos millones) y alemanes;
- en Yugoslavia, húngaros (medio millón) y albaneses (1.800.000);
- en Bulgaria, turcos (un millón).

Además de éstos, hay más de dos millones de gitanos en la región, discriminados en todos los países, y un número indeterminado de judíos, que probablemente no llega a 200.000.

De todos estos grupos, el más numeroso, tres millones de personas, lo forman los húngaros que viven fuera de las fronteras de Hungría y de entre ellos la situación más grave y potencialmente explosiva es la de los húngaros de Transilvania (Rumania).

Las cuatro décadas de silencio sobre problemas nacionales impuesto por «la paz soviética» en la zona, la convivencia en el CAME y el Pacto de Varsovia, y el anti-nacionalismo militante de los partidos comunistas (excepto el rumano) no han servido para mejorar las relaciones entre estos países. Tanto el CAME como el Pacto no se percibían (no lo eran) como acuerdos de mutua ayuda sino como imposiciones a toda la zona desde la potencia colonial soviética. Por eso mismo su existencia no ha contribuido en nada a fomentar el conocimiento mutuo y la amistad entre estos países.

Ahora, como antes de la II Guerra Mundial, polacos, checos, húngaros, etc., se interesan por la cultura y el comercio de Europa Occidental (y ahora de Estados Unidos) y muy poco por los de sus vecinos. En ninguno de estos países se estudian los idiomas de otros países del Pacto (excepto el ruso que era de aprendizaje obligatorio), y así encontrar a un húngaro que hable checo es casi tan raro como encontrar a un español que hable árabe. *Los países del Este europeo han vivido mucho más aislados entre sí de lo que imaginábamos desde Occidente.* Ya antes de la integración de España en la CEE existía mucha más relación entre nuestro país y Francia, por ejemplo, que entre cualquier país del Pacto con cualquier otro de ellos, excepto con la URSS.

La zona en conjunto mira hacia afuera y los proyectos de cooperación interna que se están poniendo en pie entre los países más desarrollados (Polonia, Checoslovaquia y Hungría) están aún en mantillas y se encuentran con muchas dificultades. Se están rompiendo rápidamente las relaciones que mantenían forzosamente unidos a estos países y la característica principal de su situación internacional es ahora el aislamiento, cuando no el enfrentamiento.

La lógica del juego político interno es la segunda causa de este reavivamiento nacionalista. *La nueva clase política agita los sentimientos nacionalistas porque no es capaz de ofrecer soluciones a los agobiantes problemas de la vida diaria.* Los antiguos comunistas podían permitirse el lujo de no tratar estos temas, a pesar del deterioro de la situación económica, precisamente porque no tenían que enfrentarse a las urnas. Los nuevos grupos, sin embargo, se encuentran ante la difícil tarea de atraer votantes para programas políticos vagos o inexistentes, cuya plasmación real en el terreno económico no puede ser otra que carestía y paro.

Y cuando no pueden obtenerse éxitos en el terreno de las políticas «reales» es muy pro-

bable que se recurra a la política simbólica. Por política simbólica entiendo aquí toda aquella que no afecta en modo alguno a las condiciones materiales de vida de la población ni tampoco al marco jurídico que regula la vida política, sino al conjunto de representaciones colectivas e imágenes públicas que definen simbólicamente la identidad de una nación.

En el caso húngaro este proceso es muy claro: cuando los nuevos grupos políticos comenzaron su vida electoral, esto es, cuando tuvieron que presentarse ante la población y atraer sus preferencias, se encontraron en una situación «desoladora». El país estaba ya caminando hacia una economía de mercado, las libertades políticas ya habían sido devueltas a la población, la Constitución revisada para sancionar una democracia parlamentaria, las tropas soviéticas abandonando el país y Hungría desligándose del CAME y del Pacto de Varsovia. En definitiva, sus programas, que eran únicamente de liquidación del régimen comunista, estaban ya en gran parte realizados y ni siquiera podían arrogarse el mérito de que el cambio se hubiera producido gracias a sus esfuerzos. No habían sido ellos los protagonistas, sino el propio PSOH (Partido Socialista Obrero Húngaro, luego PSH).

De modo que se encontraron gritando contra el régimen que ya no existía, y sin ninguna preparación para afrontar los problemas que preocupaban realmente a los votantes: el deterioro de las condiciones de vida, la ruina de los servicios públicos, la miseria del 15% de la población, el pluriempleo

El escaso éxito electoral de los viejos partidos socialdemócratas debe entenderse como fruto de una crisis de identidad e imagen.

del 80% de los adultos, la deuda externa de dos mil dólares per cápita (20.000 millones de dólares). ¿Qué hacer entonces?

Los partidos acudieron al terreno que el PSOH había dejado libre, el de la reivindicación de los derechos de las minorías húngaras fuera de las fronteras, el de la afirmación de la «identidad nacional» frente a la Unión Soviética y los demás vecinos del Pacto, el de la exaltación de la historia nacional y de la fe religiosa. Hablar muy alto de «los auténticos valores cristianos y húngaros», utilizar la bandera nacional o sus colores en cualquier ocasión, competir en promesas de venganza contra «los comunistas que han arruinado el país» y provocar o permitir el renacimiento del antisemitismo, éstas han sido algunas de las fórmulas más claras de construcción de la identidad política de los nuevos partidos.

El nuevo gobierno húngaro constituido tras las elecciones de abril de 1990, demócratacristiano, liberal y populista, está aplicando un programa económico que es básicamente idéntico al que puso en marcha el último gobierno socialista. La deuda externa del país, el déficit del presupuesto estatal, la necesidad de atraer inversión extranjera y, en definitiva, la obligación de pactar con el Fondo Monetario Internacional, no permiten realizar otro programa.

El programa económico es el mismo y la élite que dirige el país, exceptuando los niveles más altos de la Administración central y los concejales y alcaldes elegidos en oc-

Ninguno de los países de la Europa poscomunista tiene hoy las mismas fronteras que hace setenta años.

tubre de 1990, es también la misma. Las posibilidades de maniobra sobre la realidad social y económica son muy escasas, y por ello se acude a la política simbólica.

Sin duda el caso húngaro es extremo porque en ningún otro país del bloque el partido gobernante avanzó tanto por sí mismo en la vía de la liberalización económica y de la democratización política. Sin embargo, es una característica común al bloque el hecho de que *los nuevos partidos no tienen recetas para solucionar la crisis económica que forma la principal preocupación de sus electores y que en definitiva constituye el motivo de que el régimen anterior falleciera.*

El antisemitismo moderno europeo ha sido tradicionalmente una válvula de escape a la frustración ante la impotencia en momentos de grave crisis económica y social y ahora vuelve a cumplir ese mismo papel. Los judíos de la Europa del Centro y del Este ya fueron diezmados en el periodo nazi y en la guerra, pero los que sobrevivieron se afiliaron en masa a los partidos comunistas que ofrecían una defensa contra la persecución racista, y generalmente han llegado a ocupar puestos relevantes y visibles en la élite cultural, científica y política de sus respectivos países.

En Hungría han sobrevivido unos 60.000 judíos (algo más del 0,5% de la población total) de los 500.000 que vivían en ella en 1940 (el 4% de la población de entonces). Prácticamente todos viven en Budapest y sólo un tercio mantiene relaciones con la Iglesia judía, pero tanto los religiosos como los no religiosos se encuentran perfectamente «asimilados» a la cultura húngara. Su presencia es notable en los medios de comunicación, en las ciencias sociales, en las actividades artísticas, y en algunos partidos, especialmente en la Alianza de Demócratas Libres.

Los judíos desaparecieron de la dirección del PSOH tras la rebelión de 1956, cuando la

nueva dirección del partido intentó crearse una imagen «nacional» y expulsó de los puestos más visibles a los «moscovitas», en su mayoría judíos. En realidad, la mayor parte de los que fundaron el partido comunista húngaro, en 1918, y lo dirigieron por muchos años, eran de origen judío y por ello, en la percepción popular, tanto el experimento sangriento de «la República de los Consejos» de 1919, como los años de terror estalinista de 1948 a 1956, se identifican como periodos de dominio judío.

Es necesario recordar ésto porque, si bien existe un antisemitismo popular que no necesita razones de ningún tipo, existe también otro intelectual y muy elaborado que esgrime razones históricas para «demostrar» que los judíos húngaros no han sido nunca lo bastante patriotas.

Antisemitismo y reafirmación de los «valores cristianos nacionales» son las dos caras de la misma moneda. ¿Contra quién o contra qué se «reafirman» los valores húngaros? (o los polacos, cuyo proceso en este aspecto es idéntico). Contra los comunistas ateos que pusieron el país gustosamente al servicio de la Unión Soviética y contra los liberales de la Alianza, acusados de ser el canal de penetración del capital «carroñero» internacional, especialmente capital judío procedente de los Estados Unidos. A ambos grupos se les acusa implícitamente de no-húngaros, esto es, de judíos.

El partido que ganó las elecciones generales en abril de 1990, el Foro Demócrata Húngaro, ha sido acusado en muchas ocasiones de antisemitismo. La dirección del partido rechaza categóricamente esta acusación, pero muy frecuentemente alguno de sus ideólogos, de sus ministros o de sus personalidades literarias realiza alguna declaración pública en la que deja patente que interpreta la historia y la realidad de su país en términos de confrontación entre los «auténticamente húngaros» y los otros.

Los países del Este europeo han vivido mucho más aislados entre sí de lo que imaginábamos desde Occidente.

Recientemente se han producido varios escándalos de este tipo, como las declaraciones hechas en el Parlamento por el ministro de Asuntos Exteriores, Jeszenszky, miembro del Foro, en las que aseguró que los partidos que forman la coalición gobernante (el Foro, los democristianos y el partido de los pequeños propietarios) son los únicos que representan los valores cristianos y nacionales, como opuestos a las ideas «marxistas, ateas, libre-pensadoras y antipatrióticas abrazadas por ciertos miembros de la oposición». Estas declaraciones supusieron el final del consenso y la cooperación interpartidaria en política exterior, una de las pocas áreas importantes en que gobierno y oposición estaban trabajando juntos.

Unas semanas después, uno de los intelectuales de más prestigio en el Foro, y uno de los poetas más conocidos en el país, Sándor Csoóri, publicó un artículo en la revista del Foro (*Hitel*) en el que afirmaba que el proceso de asimilación de los judíos a la cultura húngara se está realizando ahora al revés, es decir, que los judíos liberales están asimilando a la población húngara a sus formas de vida y sus valores.

La acusación sobre la «falta de hungaridad» y de «materialismo liberal» se escuchó también frecuentemente en la polémica sobre el retorno de la educación religiosa a los colegios. La oposición, liberales y socialistas, no estaba en contra de que se impartieran clases de religión en los colegios, pero sí de que estas enseñanzas formaran parte del *curriculum* puntuable y de que el Estado financiara a los profesores.

El nuevo gobierno húngaro está aplicando un programa económico básicamente idéntico al del último gobierno socialista.

Mientras la coalición gobernante se muestra muy preocupada por «la restauración moral» del país, y la liquidación de la herencia ideológica y ética del pasado socialista (la corrupción, el individualismo y el «materialismo»), y el Parlamento dedica gran parte de su tiempo a discutir cuestiones relacionadas con estos asuntos, la población manifiesta una absoluta indiferencia por todo ello. Según una encuesta realizada en junio de 1990 sólo un 8% de la población considera que el Gobierno deba ocuparse de la transformación de las normas morales de la sociedad húngara.

La apatía política y la obstrucción a la reforma económica

En las primeras elecciones locales húngaras celebradas en septiembre y octubre de 1990, la participación en los núcleos de más de 10.000 habitantes fue en la primera vuelta del 31% y del 27% en la segunda. En los municipios menores votó un 51%, porcentaje suficiente para no celebrar una segunda vuelta.

Por si ésta fuera poca descalificación al sistema de partidos, los resultados de las elecciones en los municipios pequeños (más del 90% del total) dieron el 80% de las alcaldías y el 70% de los puestos de concejal a candidatos independientes, muchos de ellos personas que ocupaban ya estos cargos en el pasado. Además, los partidos de la coalición gobernante, a sólo seis meses de las elecciones generales, han perdido en éstas en los municipios grandes a favor de la oposición liberal (la Alianza de Demócratas Libres y la Alianza de Jóvenes Demócratas).

La apatía política y la escasa vinculación de la población con el nuevo sistema pluripartidista es una de las más peligrosas consecuencias de esta peculiar forma de transición a la democracia. En Hungría, como en los demás países, la transición política ha venido acompañada de un empeoramiento general de las condiciones de vida y existe una tendencia muy fuerte a considerar este deterioro como consecuencia de la transición. La nueva clase política no quiso empañar la euforia de sus primeros pasos públicos explicando claramente al país la gravedad de la situación económica y está pagando ahora las consecuencias de su olvido.

La apatía y la abstención políticas son peligrosas doblemente: no sólo cuestionan la legitimidad del nuevo régimen aumentando el desconcierto y la confusión en el ámbito de los partidos, sino que añaden un elemento más de obstrucción al ya espinoso camino de la reforma económica. ¿Qué gobierno puede sentirse fuerte para tomar las medidas impopulares que conlleva esta reforma cuando se encuentra con tales resultados en las urnas? Por otra parte, si no se avanza en ese camino, la democracia política seguirá amenazada por la extensión de la pobreza y por la inexistencia de una sociedad civil independiente del Estado.

Hungría es el país del bloque que más ha avanzado en el camino de la liberalización económica y la aparición de una economía de mercado. Por ello su caso puede ser un ejemplo de las dificultades y soluciones con que van a encontrarse los demás.

Los socialistas húngaros comenzaron hace veinte años a intentar compaginar las virtudes del mercado, al que se suponía más capaz que la planificación estatal para ordenar la vida económica, con los requisitos ideológicos del régimen, especialmente la propiedad estatal de los medios de producción, el tabú del pleno empleo y la política salarial igualitaria y obrerista.

En 1968 se puso en marcha el Nuevo Mecanismo Económico (NME), cuyo objetivo era descentralizar las decisiones otorgando una mayor libertad a las empresas para la redacción de sus planes, e introducir mecanismos de mercado en la regulación económica a través de la liberalización de los precios. (Antes del NME, hasta 1967 todos los precios, tanto los del consumo privado como los de las empresas, se fijaban por el Gobierno, y el Plan Económico Nacional definía minuciosamente los planes de producción de cada rama, después desglosados por empresas).

El intento de crear una economía de mercado sin alterar su estatalización se ha mantenido a trompicones durante las dos últimas décadas. En 1972 se produjo un importante frenazo motivado en parte por las presiones soviéticas contra lo que parecía un excesivo relajamiento del control del Partido sobre la vida económica, y en parte por razones internas. En primer lugar, el mercantilismo resultaba incompatible con la filosofía igualitarista, ordenancista y obrerista en la que descansaba todo el lenguaje político del régimen. En segundo lugar, muchos gerentes empresariales temían el fracaso de sus empresas en condiciones de desregulación de los precios y no estaban interesados en la liberalización económica. Estos gerentes, a menudo de extracción obrera, se refugiaron en la ortodoxia leninista para combatir dentro del Partido a los economistas reformistas.

A pesar del frenazo en 1972, que se tradujo en una relativa re-centralización de las decisiones económicas, la política liberalizadora continuó adelante en los años siguientes y se aceleró en la década de los ochenta. Sometida cada tanto a las presiones de retorno al dogma por parte de los grupos que resultaban menos favorecidos, la descentralización se mantuvo.

La crónica de la vida económica húngara desde 1968 es la de la persecución de un sueño imposible, el de una economía que

contara con todas las ventajas del mercado y ninguno de sus inconvenientes.

La dificultad de introducir mecanismos de mercado provenía en parte de la concentración empresarial, una característica común a todas las economías socialistas y motivada por la lógica reglamentarista. Esta concentración empresarial significaba, y significa, que una parte muy importante de la actividad económica se regula en régimen de monopolio o de oligopolio, y que, por tanto, a pesar de la liberalización de los precios, no existe competencia mercantil.

Pero, más importante aún que esto, era la incapacidad política de las autoridades económicas para afrontar la quiebra de una empresa, siempre apoyada con nuevos créditos o nuevos subsidios a sus precios. En la práctica, ninguna empresa se sentía amenazada por más que arrojara años de balances deficitarios. *El entramado de relaciones políticas y personales que mantenían unidos e intercambiando posiciones a los dirigentes de las empresas y los del Estado, impedía efectivamente el diseño de políticas racionalizadoras en lo económico.*

El crecimiento de la deuda externa, desde 1.000 millones de dólares en 1970 a 9.000 millones en 1980 y 20.000 millones en 1990, es el fruto de esta incapacidad del sistema político para negarse al saqueo permanente del presupuesto estatal por parte de las empresas.

El nivel de vida de la población se mantuvo de la misma forma, acudiendo a los cré-

***Antisemitismo y reafirmación de los
«valores cristianos nacionales»
son las dos caras
de la misma moneda.***

ditos internacionales para alimentar el sistema productivo y subsidiar los precios. Este mecanismo, básicamente similar al que sostuvieron en los años setenta Rumania, Yugoslavia, la RDA o Polonia, comenzó a desmoronarse cuando las exportaciones al mercado de divisas fuertes (marco y dólar) dejaron de ser suficientes para pagar los intereses de la deuda creciente.

En 1981 surgió la alarma en los mercados financieros internacionales, acostumbrados a considerar pagadores fiables a los países socialistas, cuando Rumania se declaró insolvente, Polonia pidió una moratoria para el pago de la deuda y los demás países mostraron fuertes déficits en sus balanzas de pago. Hungría ingresó en 1982 en el Fondo Monetario Internacional y restableció su fiabilidad como deudor, pero el porcentaje de sus exportaciones que pudo dedicarse a la renovación industrial y tecnológica era y es tan pequeño que su atraso en este campo continuó empeorando.

En la década de los años ochenta la dirección económica húngara elaboró nuevas medidas para fomentar la implicación de los gerentes empresariales en la rentabilidad económica de sus empresas, con la esperanza de que ello mejorara la eficacia del sistema. En general puede decirse que estas medidas fracasaron, y la dirección económica se encontró en un punto muerto: la solución privatizadora de la propiedad empresarial, en la mente de todos, era políticamente inaceptable, incompatible con la esencia moral del régimen, y no podía ni siquiera plantearse abiertamente.

La apatía política y la escasa vinculación de la población con el nuevo sistema pluripartidista es una peligrosa consecuencia de la transición.

Ahora que han desaparecido las constricciones políticas que imponían la estatización económica, y los nuevos grupos políticos se pronuncian sin excepción por un sistema basado en la propiedad privada, la libertad empresarial y el libre mercado, *¿qué es lo que falta en Hungría para construir una economía de mercado?*

En los años ochenta el gobierno socialista introdujo ya cambios importantes en la legislación económica, liberalizando los precios al consumo y a la producción (en 1989 el 64% de los precios ya era libre), suprimiendo los topes por arriba a los salarios que antes se imponían para evitar la formación de grandes desigualdades de renta, y permitiendo el acceso directo de las empresas a la importación. Se legisló también para atraer capital extranjero permitiendo la salida del país del 90% de los beneficios y la creación de empresas privadas sin límite en el número de empleados. Además se creó un «Comité de Desregulación» para simplificar la normativa económica y eliminar las normas innecesarias provenientes de los años ordenancistas.

Los años ochenta fueron también los de la generalización de la «segunda economía», en la que se incluye tanto a las pequeñas empresas privadas (agricultura, comercio, hostelería, construcción y servicios personales) como a una variadísima gama de fuentes de ingresos que comparten su carácter de opacidad al fisco. Aunque no existen estimaciones fiables, se habla a menudo de que esta segunda economía supone entre el 20 y el 30% de los ingresos totales de la población, pero su distribución es muy irregular, con sectores muy importantes de la población excluidos de ella, que precisamente son los más empobrecidos, como los jubilados o los empleados administrativos de nivel bajo.

Algunos han considerado con optimismo que esta segunda economía puede ser la base de la formación de la nueva clase empresarial

que necesita el país. Sin embargo, en muchos aspectos esta economía privada es subsidiaria de la estatal y no resulta nada evidente que pudiera subsistir sin la segunda.

El nuevo gobierno democrático húngaro se ha encontrado un sistema económico estatizado en su 90% (en términos de empleo), con un déficit del presupuesto estatal de 350 millones de dólares, un déficit de la balanza de pagos de 1.500 millones, y una deuda exterior de 20.000 millones, cuyos intereses suponen otros 14.000 millones de dólares, para una población total de 10 millones de personas.

La reducción del déficit presupuestario, pactado con el FMI, ha supuesto la anulación de los subsidios a prácticamente todos los precios, excluida la leche y el pan, y ello ha ocasionado una inflación del 40% en 1990 que no se ha visto compensada con aumentos salariales de importancia. La población que vive bajo el nivel oficialmente considerado como de subsistencia no deja de crecer y se encuentra ya cerca del 25%. El paro está empezando a ser visible a causa del estancamiento del mercado de trabajo, que impide a los jóvenes encontrar su primer empleo.

La reducción de los gastos estatales en el sector de los servicios sociales, que empezó ya a principios de los ochenta, ha arruinado la calidad de estos servicios y tanto la sanidad como la educación o las infraestructuras se encuentran en niveles bajo mínimos.

A esto se han añadido en 1990 tres fenómenos que han venido a dificultar aún más la vida económica húngara. La sequía, que ha supuesto unas pérdidas para la agricultura de unos 770 millones de dólares, la crisis del Golfo pérsico y la disminución del aprovisionamiento de petróleo soviético, que han encarecido en unos 200 millones de dólares la factura petrolera del país, y la disolución efectiva del mercado del CAME, especialmente los problemas en el mercado de la

Hungría es el país que más ha avanzado en la liberalización económica y la aparición de una economía de mercado.

Unión Soviética que recoge el 50% de las exportaciones húngaras.

Todo ello configura un panorama desolador en el que las medidas para la creación de una economía de mercado deben ser continuamente pospuestas hasta la resolución de los problemas que amenazan de inmediato el estrangulamiento de todo el sistema. *En las condiciones actuales, el gobierno tiene que elegir entre avanzar en la mercantilización o asegurar a su población una mínima protección vital.* La economía húngara carece de los recursos necesarios para hacer ambas cosas a la vez.

Uno de los requisitos de la mercantilización, y a la vez del saneamiento del presupuesto estatal, es *la liquidación o reducción de las grandes empresas deficitarias.* En este punto el Gobierno se encuentra ante un frente común de oposición formado por los gerentes empresariales afectados, los bancos comerciales implicados en estas empresas y el sindicato obrero heredado del viejo régimen.

Por lo demás, el ambiente político no podría ser más negativo para este saneamiento: el gobierno carece de un plan económico realista sobre los sectores a impulsar para ocupar a los desempleados que se producirían, y la población, acostumbrada al paternalismo estatal, es muy contraria a soluciones de riesgo. Por último, y más importante, los obreros de la gran industria a reconvertir no han participado en modo alguno en el proceso de transición a la democracia y no se

La reducción de los gastos estables en el sector de los servicios sociales ha arruinado la calidad de estos servicios.

sienten vinculados a este sistema que les pide ahora sacrificios.

Los trabajadores no aceptan la necesidad de la reestructuración y ni siquiera se preocupan por argumentar en términos económicos sobre la eventual posibilidad de salvar sus puestos de trabajo. Se han educado en un sistema que les consideraba el centro del mundo y se niegan a pasar a otra posición. Los sindicatos son en la actualidad una fuerza conservadora y anti-mercado.

Si la reestructuración deja de ser tema de debate para convertirse en una política real, es de prever una fuerte oposición sindical alimentada por los sectores nostálgicos del viejo régimen, aún muy numerosos. En la situación actual de abstención electoral y apatía política, el gobierno no puede sentirse lo bastante fuerte para tomar medidas tan impopulares, que provocarían una oposición muy destabilizadora.

La privatización de la propiedad empresarial es otro de los requisitos para la creación de una economía de mercado. El objetivo declarado por el principal partido gobernante, el Foro Demócrata Húngaro, es la reducción del sector estatal al 40% de la actividad económica en 1995.

Paradójicamente, el primer paso necesario para proceder a la privatización de las empresas fue su «reestatalización» a través de la creación de una Agencia de la Propiedad Estatal. Este paso fue obligado para evitar la llamada «privatización espontánea» que es-

taban llevando a cabo numerosos gerentes empresariales vendiendo sus empresas a inversores extranjeros, repartiendo los beneficios de la venta entre los miembros del Consejo Empresarial y asegurándose un puesto de trabajo bajo el mando de los nuevos propietarios.

En una economía socialista los títulos de propiedad empresarial no son necesarios; las empresas son del Estado pero no tienen personalidad jurídica propia, y la propia personalidad jurídica del Estado es «nebulosa». Ni el Derecho civil ni el administrativo están desarrollados y ello crea fuertes conflictos cuando se introducen elementos de economía privada de mercado. La «privatización espontánea» fue consecuencia de este vacío legal, simultáneo al vacío de poder de los últimos meses de gobierno socialista.

Ahora la Agencia de la Propiedad Estatal gestiona uno por uno todos los procesos de venta y en noviembre de 1990 había privatizado 60 de las 2.000 empresas elegidas para ser privatizadas. De éstas 60 empresas muchas son las mismas que sufrieron la «privatización espontánea», cuyos procesos se han revisado, y en conjunto sólo una minoría ha pasado a ser enteramente de propiedad privada. Todos los nuevos propietarios son extranjeros, algunos de procedencia húngara.

La lentitud del proceso privatizador está relacionada con *la inexistencia de capital local*, ni familiar ni empresarial. Esto significa que *la privatización sólo es posible a través de la inversión extranjera*, lo cual supone una diferencia muy importante respecto a otros procesos privatizadores recientes, como el inglés. Podría pensarse, como hacen algunos grupos, en soluciones de tipo cooperativo o de reparto masivo de acciones entre la población. De hecho existe un movimiento de creciente importancia, el de los Consejos Obreros, que está reclamando la propiedad empresarial para los trabajadores.

Sin embargo, *no existe la menor garantía de que una salida de este tipo, «socializadora» de la propiedad empresarial, no significara aún mayores presiones sobre el Estado para el mantenimiento subsidiado de las empresas.* Además, las tendencias inflacionistas serían fuertísimas: nadie duda de que la primera medida de los empleados convertidos en accionistas sería subir el sueldo y a continuación subir el precio de sus productos para asegurar el sueldo del mes siguiente. En caricatura, ésta es una de las claves del proceso inflacionario yugoslavo.

El hecho de que la privatización signifique necesariamente la penetración de capital extranjero en cantidades importantes es causa a su vez de temores entre los grupos nacionalistas que forman la coalición de gobierno. «El renacer de los valores húngaros», sea eso lo que sea, no parece un objetivo compatible con la rentabilidad de un país que no puede sobrevivir sin la ayuda financiera y la inversión exterior.

El Foro Demócrata Húngaro se propone limitar la participación extranjera a un 30% de la actividad económica nacional, pero esta limitación es sin duda demasiado optimista. La inversión extranjera sólo se dirige hacia los sectores saneados, empresas que son ya rentables o que podrían serlo sin grandes operaciones de reestructuración, entre otras cosas porque no confían en la posibilidad de un saneamiento pacífico. Además los inversores extranjeros encuentran todavía frenos importantes a causa de las inseguridades jurídicas aún no resueltas, de las dificultades para actuar en la maraña actual de intereses políticos, personales y estatales, y de la pobreza de las infraestructuras, especialmente el teléfono.

La privatización resultaría más fácil si se produjera una *descentralización empresarial* que permitiera a los inversores enfrentarse a unidades económicas medianas en vez de los conglomerados actuales. Esta descentrali-

zación es además necesaria para la creación de una auténtica competencia de mercado, impedida como se ha dicho por el carácter monopolístico y oligopolístico de muchos sectores.

Los Consejos Obreros son la principal fuerza favorable a la descentralización empresarial, que reclaman a la vez que la autogestión. Los gerentes se oponen a este despiece de sus empresas, puesto que obviamente perderían en la descentralización gran parte de su área de poder y disminuirían sus oportunidades negociadoras con el eventual inversor extranjero. Los partidos parlamentarios, formalmente favorables a la descentralización, en la práctica no la apoyan por temor a que el caos sea su consecuencia a corto plazo.

Por último conviene recordar que la decisión de crear una economía de mercado es en Hungría, como en los demás países del Este, la consecuencia racional del diagnóstico efectuado por las élites políticas e intelectuales, y *no el resultado de una presión liberalizadora en lo económico.* Dicho de otra forma, 40 años de economía estatal han destruido las fuerzas sociales y culturales autónomas que sostenían la economía de mercado anterior a la II Guerra Mundial, y ahora no resulta nada evidente que existan grupos sociales importantes interesados personal y materialmente en la mercantilización de las relaciones económicas.

Este es un problema crucial porque si no existe una presión social sobre el gobierno para avanzar en la liberalización, y el hecho

Los obreros de la gran industria a reconvertir no han participado en la transición a la democracia.

es que no existe, las presiones en sentido contrario, esas sí evidentes, se impondrán indefectiblemente y *la creación de una economía moderna de mercado (no ya próspera) puede convertirse en una meta inalcanzable durante decenios.*

Existe un peligro real de que la liberalización económica en el Este se detenga en el punto en que comienzan los conflictos sociales, punto al que han llegado ya Polonia y Hungría: una estructura en la que un inmenso sector estatal que agrupa entre el 70 y el 90% del empleo, con muchas empresas no competitivas, convive con el sector privado formado por el pequeño comercio, el campesinado semi-independiente y la pequeña empresa de servicios o de construcción de viviendas. En

este modelo sigue faltando la sociedad civil independiente sin la cual no existe democracia estable.

La comunidad internacional y especialmente los países europeos ricos no pueden permanecer cruzados de brazos observando el proceso y limitando su ayuda económica a la cicatería actual. Un frenazo en la liberalización provocado por la extensión de la pobreza y de la conflictividad social no significaría una recuperación sustancial del nivel de vida, sino únicamente un alargamiento de la crisis. Y esta crisis implicaría, en la lógica política de estos sistemas, nuevas irrupciones de la demagogia populista y nacionalista, y, en definitiva, una amenaza para la democracia y para la paz en el corazón de Europa.